

Propietarios de la censura en Venezuela

Un trabajo periodístico de investigación colaborativo reveló quiénes son los nuevos dueños de medios de comunicación en Venezuela. Una serie de reportajes cuentan las modificaciones que se produjeron a nivel interno, a partir del cambio de propiedad, como censura, autocensura, despidos y renuncias en nueve estados del país.

**I IPYS VENEZUELA
(EMILIA DÍAZ-STRUCK)
I ARMANDO.INFO
I PODEROPEDIA**

Abstract

An investigative journalistic collaborative work revealed who are the new owners of media in Venezuela. A series of press reports tells that the modifications has been produced in an internal level starting from the change of property like censorship, selfcensorship, quitting and resignations on nine states of the country.

Durante un año, un equipo de periodistas venezolanos en distintas regiones y de diversos medios de comunicación se abocó a conocer las historias tras los procesos de cambio de propiedad de los medios en Venezuela y revelar los nombres de los nuevos dueños, sobre los que solo existían rumores o silencio.

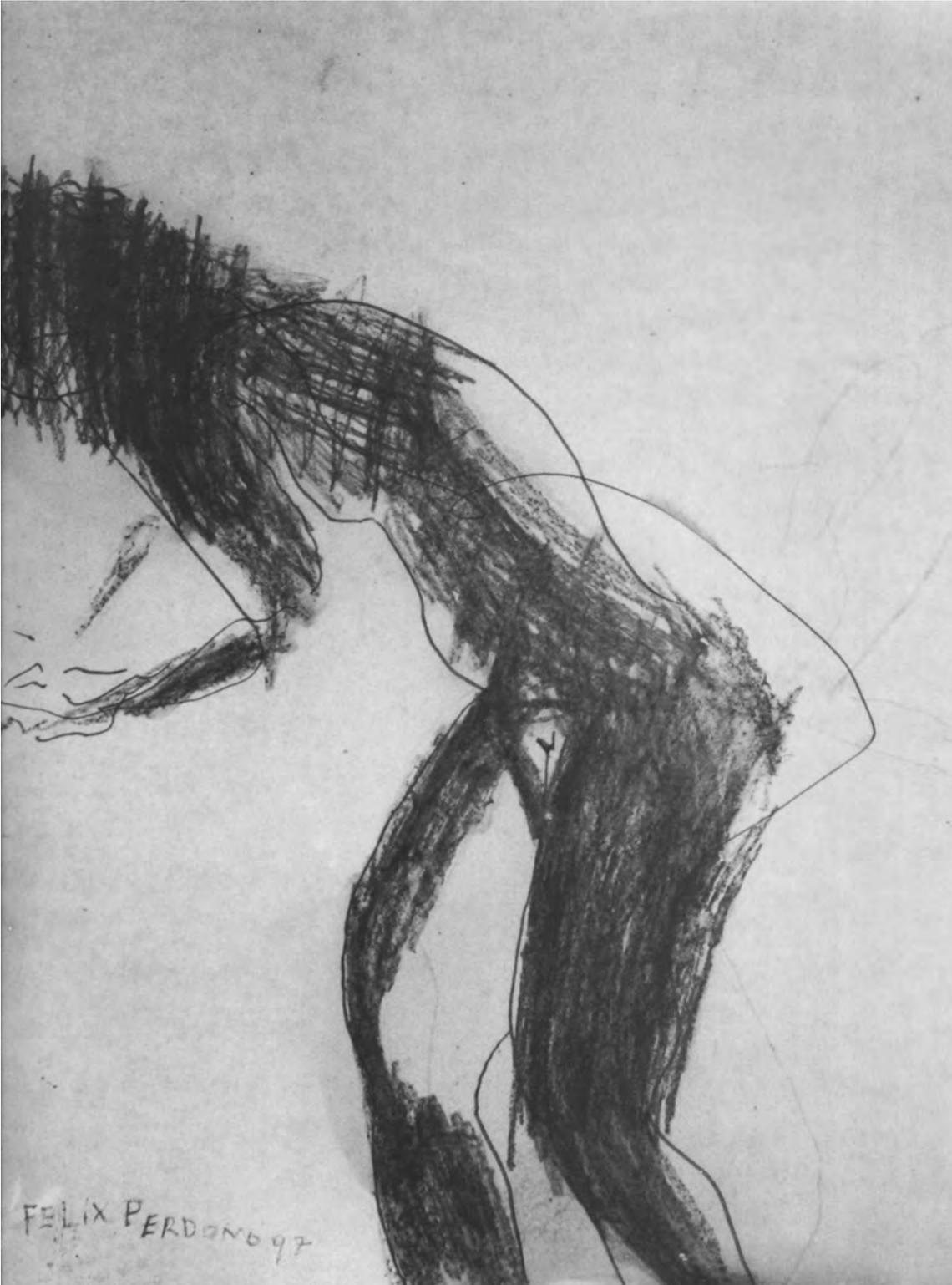
La investigación *Propietarios de la Censura en Venezuela*, liderada por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela en alianza con Armando.info y Poderopedia, presenta una serie de reportajes que revelan la opacidad en los procesos de compra-venta de la mayoría de los medios de comunicación. Se muestra cómo las ventas estuvieron forzadas por un conjunto de presiones contra los medios por su línea editorial, como la apertura de procesos judiciales y cierre de fuentes de información. Tras el cambio de propiedad se evidenciaron modificaciones de la línea editorial y esfuerzos por silenciar a periodistas críticos. Una constante fue la disminución de las unidades de investigación en impresos y en televisión. Otra, la renuncia y despido de muchos periodistas de su lugar de trabajo luego de haber sido víctimas de la censura por los cambios en la línea editorial.

Personajes que no pueden ser mencionados en los medios, fuentes que no pueden ser consultadas, amenazas a periodistas por la cobertura de ciertos temas sensibles, así como mayor espacio a eventos ligados con poderes regionales o nacionales son algunas constantes que revelaron testimonios de periodistas de distintas regiones, que vivieron los cambios de propiedad en medios de comunicación venezolanos.

La investigación periodística abarcó tanto técnicas del periodismo de datos como de la reportería clásica. Se conformó un grupo de periodistas que desde distintas regiones de Venezuela se abocó a indagar sobre los nuevos dueños de los medios de comunicación en el país, así como las transformaciones que se dieron en los mismos ante los cambios de propiedad. Para ello, como parte de la investigación documental, acudieron a los registros mercantiles en los distintos estados para conocer detalles sobre la compra-venta. También contactaron a periodistas que trabajaron y trabajan en los medios, así como a los viejos y nuevos dueños. En el caso de los propietarios, la mayoría prefirió permanecer en silencio.

El proceso de trabajo incluyó la elaboración de una base de datos con la información obtenida en los registros mercantiles, los registros de amenazas y agresiones a periodistas que lleva el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, el estudio de Censura y Autocensura de esta organización, así como las sentencias judiciales que se encuentran disponibles en línea. Como parte de la investigación también se revisaron bases de datos internacionales para indagar aquellos casos en los que la propiedad de los medios se diluye en otros países.

Al final, esta experiencia inédita en Venezuela involucró al menos a treinta periodistas de distintos medios de comunicación y de distintas regiones, que trabajaron en conjunto en este proyecto. En total se revisó la historia del cambio de propiedad de al menos 25 medios de comunicación que abarcan impresos, radio y televisión en nueve estados del país: Amazonas,



Galería de Papel. Dibujo s/t. Félix Perdomo. (s/f)

Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Mérida, Monagas y Zulia. Se realizó una serie de entrevistas por cada caso, que recogen testimonios de primera mano sobre lo ocurrido en los distintos medios de comunicación. Sus historias son parte de este especial.

Se revisaron los casos de: Cadena Capriles, *El Universal*, *Globovisión*, *De Frente*, *El Sol*, *Extra*, *Catatumbo TV*, *El Oriental*, *Versión Final*, *Nueva Prensa de Guayana*, *Primicias*, *El Luchador*, *El Norte* y varias emisoras radiales. Todos pueden ser consultados a través de: <http://ipys.org.ve/proprietariosdelacensura/index.html>.

A continuación se presentan algunos de los reportajes de los periodistas que fueron parte de este proyecto.

La radio de provincia quedó sin caféina

El cierre, la venta forzosa o la condescendencia: los propietarios de radioemisoras independientes en el interior del país saben desde hace tiempo que esas son las opciones que les quedan. Después del cierre compulsivo de 32 emisoras (25 fuera de Caracas) en agosto de 2009, Conatel ha seguido clausurando señales por cuentagotas para otorgar sus frecuencias a amigos del Gobierno o a programaciones inofensivas. Los espacios informativos y de opinión desaparecen mientras las empresas del sector siguen en un limbo legal que las precariza

“La carta de Conatel, en la que se exigía el corte de la transmisión, la recibió un técnico a las 6 de la mañana el sábado 1 de agosto de 2009. Era como para ponerse a llorar... Nunca pensamos que sería así”, recuerda el presidente del Circuito Nacional Belfort (CNB), Nelson Belfort, mientras recorre los pasillos y estudios de lo que fue la sede de 102.3 FM, una de las emisoras más populares de la región capital, ubicada en la urbanización La Carlota, al este de Caracas.

Un espacio que fue diseñado exclusivamente para el funcionamiento de esa radio, se reduce ahora a un par de muebles viejos, máquinas de escribir, televisores sin funcionamiento y una consola en desuso. En sus paredes se encuentran aún colgados los premios que alguna vez recibieron, las carteleras que usaron y un papel que reza: “Tenemos tanto miedo que... ¡Seguiremos informando!”

En julio de 2009, el aquel entonces ministro de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi) y director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello –hoy presidente de la Asam-



Belfort confiesa que se tiene extremo cuidado al cumplir con la ley de contenido: “Hay que evitar problemas con el regulador para que no haya excusa para decir ‘pusiste una coma donde no era’ y me vayan a cerrar por un tecnicismo”.

blea Nacional y primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)–, bajo la consigna de *democratizar el espectro radioeléctrico*, abrió procedimientos administrativos para recuperar las concesiones de 86 emisoras AM, 154 emisoras FM y de 45 televisoras (10 VHF y 35 UHF).

El 1 de agosto de 2009, las amenazas de cierre que recibieron se hicieron realidad para solo 32 emisoras y dos televisoras ubicadas en distintos rincones del país. De estas emisoras, siete transmitían en el Distrito Capital, y cinco formaban parte, en distintas zonas del país, del circuito CNB: 102.3FM Caracas, 101.1FM Valencia, 94.5FM Táchira, 96.1FM Punto Fijo y 102.1FM Maracaibo.

El circuito radial que creó el programa “Aló Ciudadano”, conducido por Leopoldo Castillo originalmente y retransmitido luego en formato televisivo por *Globovisión*, fue el gran perdedor de la jornada. “Éramos un grupo de diez emisoras de radio a nivel nacional. Sin la emisora matriz y otras importantes, el circuito se vio muy comprometido, y eso trajo como consecuencia que, de manera directa, quedaran sin trabajo 240 empleados, sin contar los talentos indirectos que dependían de nosotros,” explica Belfort.

Después de la masacre, cierres selectivos

A más de cinco años de esa *razzia*, no hay ningún caso en el que hayan procedido ni los amparos constitucionales ni las medidas cautelares presentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para solicitar protección al derecho al trabajo. Tampoco tuvieron efecto las denuncias hechas por Belfort ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la actualidad, el antiguo dial de CNB Caracas está ocupado por la radio de la Asamblea Nacional, que tomó la frecuencia apenas una semana después del cierre de la emisora comercial. Otras cuatro emisoras pertenecen ahora a YVKE mundial (Mérida 106.3FM, Nueva Esparta 92.9FM, CNB Táchira 94.5FM y CNB Zulia 102.1FM), de propiedad estatal. Y Sucre 103.3FM es el canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela (RNV), también del Estado.

Dos de las frecuencias desocupadas, ambas del estado Amazonas (1130AM y 107.5FM), no han sido tomadas a la fecha, ni siquiera por radios comunitarias.

Otros diales fueron tomados por emisoras comerciales. Tales son los casos de Bolívar 96.9FM, ahora *Radio Nikra*; Carabobo 100.1FM, actualmente *Radio Wama*; y Zulia 105.1FM, que se conoce hoy como *la Radio del Pop*.

Vargas 106.9 FM fue tomada por una radio cristiana, y Carabobo 98.3FM es conocida como *Extrema* “la emisora popular de Libertador”, según su lema. Sin embargo, esta última no aparece en el directorio de emisoras comunitarias oficiales proporcionado por Conatel.

Por estar a nombre de Nelson Belfort y no de su padre, el único dial que permanece como CNB es 95.3 FM, en Mérida. Las estaciones que no fueron cerradas, pertenecientes al circuito, se mantienen al aire pero con otro nombre. Los programas de opinión disminuyeron y Belfort confiesa que se tiene extremo cuidado al cumplir con la ley de contenido: “Hay que evitar problemas con el regulador para que no haya excusa para decir ‘pusiste una coma donde no era’ y me vayan a cerrar por un tecnicismo”.

Sobre la lista con los nombres de los 251 medios restantes que en julio de 2009 aparecían como sancionables, no se supo más. Tampoco hubo otra jornada comparable a la de ese 1 de agosto, que pasó a ser conocido en la opinión pública como el *Radiocidio*. Desde entonces Conatel ha venido cerrando radios de manera silenciosa y paulatina en el interior del país.

Curarse en salud o el precio de la autocensura

Ya en enero de 2012 el diario *El Universal* de Caracas publicaba que, durante el año anterior, Conatel había procedido al cierre de 27 emisoras de radio alrededor del país.

Una de las emisoras mencionadas en aquel entonces era *Cosmopolitan* 107.9 FM, en el estado Carabobo. Se dijo que su salida del aire se debía a la aplicación de un proceso administrativo por parte de Conatel. Sin



embargo, la institución negó las acusaciones y explicó, a través de su entonces gerente general de operaciones, Enrique Quintana, que se trataba de una simple inspección “como cientos que se realizan trimestralmente por denuncias de interesados que operan el espectro radioeléctrico”.

En la actualidad ya no existe *Cosmopolitan*. Su frecuencia pertenece a la emisora *Frenesí*. Su dueño, Ezequiel Aranguren, asegura que cuando comenzaron a tener problemas administrativos con Conatel en 2011, decidió darle fin a la relación con los socios de *Cosmopolitan* y crear –en la misma frecuencia– este nuevo medio. Pero lejos de únicamente haber cambiado de nombre y de socios, también cambió su línea: de tener una clara tendencia opositora, *Cosmopolitan* –ahora *Frenesí*– pasó a la completa asepsia política.

Mareline Sánchez, quien trabaja en *Frenesí*, confesó que aunque en su programa “Punto en Boca” da lectura a los diferentes titulares y noticias diarias, evita caer en temas políticos.

Durante el 2011, en el mismo estado, Conatel también cerró temporalmente la emisora *Carabobo Stereo* 102.3 FM bajo el argumento de que actuaba de manera clandestina. Bajo el mismo alegato, en noviembre de ese año, funcionarios de la institución y efectivos de la Guardia Nacional incautaron los equipos de nueve emisoras, dos en el estado Falcón, tres en el estado Zulia y cuatro en Monagas.

La Caicareña 100.5 FM y *VIP* 93.1 FM del estado Monagas fueron sacadas del aire durante el año 2012. En la actualidad operan en la misma frecuencia una radio comercial y una radio cristiana, respectivamente. Los programas de opinión son escasos, así como en las demás emisoras que siguen funcionando en el estado.

Otra emisora que ha dado de qué hablar en Monagas es *Líder* 100.7FM, sacada del aire por Conatel en marzo de 2012, aunque volvió al aire pocos días después, cuando el ex alcalde de Maturín, José Vicente Maicavares, tomó distancia del entonces gobernador José Gregorio Briceño, un disidente del PSUV que fue expulsado de las filas oficialistas.

En septiembre de 2013, cuatro emisoras salieron del aire y sus equipos fueron decomisados al sur del país, en el estado Amazonas: *Voz del Orinoco* 98.5 FM, *Impacto* 97.5 FM, *La Deportiva* 99.9 FM y *Shamanika* 101.1 FM. El ministro de Turismo, Andrés Izarra, declaró sobre el hecho a los medios: “No hay más radio fascista en este estado. Se acabó. Conatel

Si uno no quiere que terminen de cerrar todas las emisoras y que no quede ninguna ventana para dar información hay que ser inteligente al emitir opiniones. Indudablemente me estoy autocensurando. Estamos en un régimen con mucha represión y limitaciones”, afirmó Guarulla.

sigue monitoreando, metiendo el ojo”, refiriéndose a la *Voz del Orinoco*.

Los problemas en *Shamanika* 101.1 FM comenzaron cuando Jackson Márquez, diputado del Consejo Legislativo del estado, emitió en su programa unos comentarios en los que hacía “señalamientos personales sobre dos generales de guarnición, Jesús Zambrano y el general Pinto Gutiérrez. Zambrano me llamó dos veces y Pinto Gutiérrez una”, explicó el director del medio, Augusto España. *Shamanika* 101.1 FM recibió una multa de 25 mil unidades tributarias por operar sin habilitación y con el cierre quedaron sesenta personas sin empleo.

En el caso de la *Voz del Orinoco*, unos treinta empleados fueron cesados de sus cargos. Adriana González, alcaldesa del municipio Atures, estaba dentro de la emisora cuando Conatel ordenó el cierre. “Fue un día negro para la libertad de expresión. La radio estuvo tomada desde las 10:00 am hasta las 8:00 pm y nosotros prácticamente secuestrados adentro. Fuera de la emisora se reunió gente del PSUV. No podía ni entrar ni salir nadie”. Los problemas con la *Voz del Orinoco* surgieron luego de la cobertura que este medio realizó durante la toma del Hotel Amazonas, en julio de 2013, un centro turístico que le fue despojado a la gobernación local –opositora– para asignarlo al ministerio de Turismo.

Privados de independencia

De doce emisoras radiales en Amazonas, la mitad está asociada directamente al Gobierno nacional. El resto son emisoras de música cristiana o de corte comercial. Las emisoras privadas que quedan en el

aire decidieron ser más cuidadosas con las opiniones que se emiten al aire.

Simeón Rojas, director de *Marawaka* 103.1 FM, reconoció haber bajado el tono de la programación en los últimos meses: “Siempre hemos sido cuidadosos del contenido, pero después de septiembre comprendimos que debemos tener mayor responsabilidad y cuidado en el ejercicio de la libertad de expresión. En la radio no se puede decir todo lo que te dé la gana... Por algo mal dicho puede haber consecuencias”.

El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, trasladó el programa de radio “Sábados con Liborio” de la *Voz del Orinoco* para *Marawaka*. “Si uno no quiere que terminen de cerrar todas las emisoras y que no quede ninguna ventana para dar información hay que ser inteligente al emitir opiniones. Indudablemente me estoy autocensurando. Estamos en un régimen con mucha represión y limitaciones”, afirmó Guarulla.

Según la memoria y cuenta del Ministerio para la Comunicación e Información (Minci), para el año 2011 en Venezuela operaban 938 radios y televisoras autorizadas. De ese número, 660 eran privadas; 235, comunitarias; y 43 públicas. De esa proporción se ha valido tradicionalmente el Gobierno para decir que aún la empresa privada, potencialmente opositora al proceso revolucionario, es mayoría en el espacio radioeléctrico.

Sin embargo, la fórmula no contempla las modificaciones y ajustes que en muchos de esos medios privados se han hecho para no irritar a las autoridades, sin contar con aquellas radioemisoras que son propiedad de partidarios abiertos del Gobierno.

Las cifras tampoco toman en cuenta el número de emisoras ilegales que siguen operando en el país. Los entrevistados coinciden en que cada vez son más los diales tomados por ilegales, que existen muchas concesiones vencidas y que las autoridades no hacen nada al respecto: “Todos en el país siguen funcionando con la concesión vencida. No la cierran porque no consiguen el punto político para hacerlo. Aunque desde que falleció el presidente Chávez pareciera que la moda no es cerrar, sino comprar. Si te pones duro, te cierro... Si accedes, te compro”, expone Belfort.

Despidos y renuncias se produjeron en cadena

La venta del principal grupo editorial del país, en apariencia a un grupo británico de inversores, además de contra-venir la normativa venezolana sobre

la propiedad de medios, dejó trunco un proyecto de innovación periodística sin precedentes. Ahora Últimas Noticias, el diario de mayor circulación, y sus publicaciones hermanas de la antigua Cadena Capriles, quedaron reducidos al ejercicio de la precaución y la complacencia con el poder

Los periodistas se mostraron indignados con la analogía formulada por su nuevo presidente: un periódico no es una fábrica de helados, reclamaron durante la asamblea realizada el 6 de marzo de 2014 en la sala de redacción. David De Lima –político afecto al chavismo, ex gobernador de Anzoátegui, sin experiencia previa en medios de comunicación, pero designado el 26 de febrero de ese año al frente de la empresa editorial más grande del país– insistía en que los reporteros debían agradecer su presencia en la reunión, así como su disposición a responder todas sus dudas. Todas menos una: quiénes son los nuevos dueños de la Cadena Capriles, hoy Grupo Últimas Noticias. “No estoy autorizado para decirlo (...) La cara visible soy yo”.

Se jactó, sin embargo, de ser el gerente de medios más sincero, de contar lo que nadie decía: que los periódicos eran instrumentos comunicacionales al servicio de los intereses de sus propietarios, y que debían arrojar *números azules*, refiriéndose a sus réditos. Que ningún presidente discute la gerencia de una empresa con sus empleados. Y que aun así él estaba ahí, frente a ellos, para asegurarles que la línea editorial no cambiaría, que nada sería censurado. “(...) mientras esté dentro de la Constitución”, se apresuró a advertir. Y dio un ejemplo: dijo que las guarimbas –en referencia a las protestas contra del Gobierno nacional que se desarrollaban desde el 12 de febrero en distintas partes del país– eran inconstitucionales, parte de un golpe de Estado.

La preocupación invadió los rostros de los periodistas de los tres diarios –*Últimas Noticias, El Mundo Economía y Negocios, y Líder en Deportes*– que conformaban y todavía conforman el conglomerado comunicacional. Manifestaron su temor a incurrir en un desequilibrio informativo a favor del Gobierno. “Hay 43 páginas”, respondió De Lima varias veces a las preguntas relacionadas con la jerarquización de noticias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, y los actos de Estado merecerían, a su juicio, un tratamiento relevante. Una bomba en la Asamblea Nacional, en cambio, un espacio pequeño en la sección de Sucesos; “los planes golpistas no irán en primera página”, sentenció.



LATAM MEDIA HOLDING

Su mayor oferta de servicio es el dominio de las regulaciones locales y aun así representa a una empresa que compró un medio venezolano, en contra de lo establecido por la legislación venezolana. Una petición de información al respecto fue entregada a la sede venezolana de TMF, pero hasta la fecha no hubo respuesta.

Esa tarde, después de la asamblea, todos siguieron trabajando, aún sin saber para quién lo hacían. Se lo preguntan desde el 25 de octubre de 2013 cuando la empresa anunció la concreción de la venta. Latam Media Holding, una compañía inscrita en Curazao (una isla del Caribe vecina a Venezuela, antigua colonia holandesa y paraíso fiscal) un mes antes –el 26 de septiembre– es la nueva propietaria oficial. El registro mercantil del Grupo Últimas Noticias (nombre oficial de la Cadena Capriles) así lo confirma, pese a que el Decreto N° 2.095 –aprobado el 13 de febrero de 1992 para regular las inversiones extranjeras– establece que los periódicos en idioma castellano quedan reservados a las empresas nacionales.

Latam Media Holding fue creada por TMF Group (capítulo Curazao), una firma de asesoría de empresas que, según su portal digital, opera en más de 75 países y brinda apoyo a las compañías que desean expandirse con inversiones internacionales. Su mayor oferta de servicio es el dominio de las regulaciones locales y aun así representa a una empresa que compró un medio venezolano, en contra de lo establecido por la legislación venezolana. Una petición de información al respecto fue entregada a la sede venezolana de TMF, pero hasta la fecha no hubo respuesta.

Latam, sin embargo, no es más que una empresa intermediaria –con funciones de adquirir, vender, traspasar, administrar otras empresas– al servicio del Grupo británico Hanson (Hanson Group o también llamado Hanson Asset Management Ltd), con inversiones en diferentes países de Europa, Asia

y América, indica una nota publicada por Últimas Noticias. Fue registrada en Londres el 23 de marzo de 2010 y hasta el primer trimestre de 2013 solo contaba con seis empleados, según la base de datos DueDil sobre empresas del Reino Unido e Irlanda. Se solicitó, a través de correo electrónico, una entrevista con algún representante de Hanson Group para este trabajo, pero no contestaron.

Nuevos dueños, nuevas órdenes

Un tuit de Idania Chirinos, periodista del canal internacional NTN24, *tubeó* –término usado en el argot periodístico en referencia a quien da la primicia– a los trabajadores de la Cadena Capriles. “(...) Lo habría comprado un banquero, cuya inicial es la de un canal de TV”, publicó en mayo de 2013. Se refería al dueño y presidente del Banco Occidental de Descuento (BOD), Víctor Vargas Irausquín. La entidad financiera lo negó a los tres días: “No es de nuestro interés ni lo permite la Ley de Bancos”, indicó la cuenta de Twitter de BOD. Eso no fue, sin embargo, lo que Vargas dijo a algunos periodistas en octubre, cuando se reunió con los distintos jefes del medio de comunicación, en representación de la nueva gerencia. Miguel Ángel Capriles –ex presidente de la Cadena Capriles y vocero de la antigua composición accionaria que lo incluía a él y a sus seis hermanas– señaló, ante las preguntas, una silla ocupada minutos antes por Vargas. “Yo hice los negocios con el señor que estaba sentado aquí”, afirmó Capriles, de acuerdo con testimonios de periodistas que presenciaron la escena, entre ellos, Omar Lugo, el primero en ser despedido.

Los rumores no estuvieron muy alejados de la realidad: el BOD fue el principal financiero en la compra de la empresa editorial. Siete meses antes, de hecho, la compañía británica reportaba un valor neto de 2 millones 49 mil 313,56 dólares, según los registros de DueDil, por lo que Hanson habría comprado una empresa venezolana a un precio que superaba 47 veces su propio patrimonio: el Grupo Últimas Noticias fue vendido por 614 millones 812 mil 320 bolívares –97 millones 589 mil 159,55 dólares al cambio oficial–, de acuerdo con su expediente mercantil.

El documento indica que este banco, en su carácter de principal acreedor financiero, designó a dos de los miembros de la nueva junta directiva. “Una vez pagada la totalidad de las referidas acreencias, la Asamblea de Accionistas será el órgano facultado para el nombramiento de la totalidad de los directores de la compañía”, reza el documento.



Después de la venta, la directiva de la compañía quedó conformada por Carlos José Acosta López (quien formaba parte de la antigua junta y además es presidente de H.L. Boulton S.A.C.A. C.A., de importación y exportación de diversos productos y equipos), Pedro Rendón Oropeza (abogado del BOD), René Brillembourg Capriles (sobrino de los antiguos propietarios, con amplia trayectoria en el sector financiero), Robert Hanson (presidente de Hanson Group), Christian Patrick Teroerde (director general de Hanson Group), Juan Isidro Señor Bogueña (integraba la antigua junta directiva y es vicepresidente de la empresa española Innovation International Media Consulting Group, SL), Manuel Cristóbal Saucedo (propietario de la compañía española Saufive Sociedad Limitada), Diego Lepage (abogado de Víctor Vargas), Ricardo Castellanos (presidente ejecutivo en la antigua directiva) y José Antonio Gil Yépez (director de la encuestadora Datanálisis).

El Acta de Asamblea del Grupo Últimas Noticias que registra el cambio de propiedad, además, da cuenta del nombramiento de Desireé Santos Amaral, diputada a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), como nueva consejera editorial. Dirige una emisora adscrita al Ministerio de Comunicación e Información (Minci), el primer organismo del Gobierno en dar señales de presión a mediados de 2013 a través de correos electrónicos con sugerencias editoriales. El director del diario *Últimas Noticias*, Eleazar Díaz Rangel, y la vicepresidenta de Medios, Nathalie Alvaray, manifestaron su descontento. Los emails cesaron, mas no la incidencia gubernamental: Lugo fue destituido de su cargo como director del diario *El Mundo Economía y Negocios* el 18 de noviembre de 2013, días después de que el mandatario nacional criticara una de las portadas de ese periódico durante una transmisión televisiva. “Cuando los intereses del gobierno tienen cómo llegar a una redacción, significa que tiene mayor presencia de la normal, que tiene capacidad de decisión y eso viene dado por una capacidad accionaria”, considera Lugo. La publicación hacía alusión a la reducción de las reservas internacionales, con base en datos oficiales del Banco Central de Venezuela. Lugo, antes de su salida, recibió recomendaciones –indirectas desde la alta gerencia, dice– para proteger a algunas figuras del Gobierno. “Cuidar” a Nelson Merentes, presidente del BCV, y abstenerse de mencionar que el hermano de la primera dama, Cilia Flores, era el nuevo tesorero nacional, fueron algunas de las sugerencias.

Lugo, antes de su salida, recibió recomendaciones –indirectas desde la alta gerencia, dice– para proteger a algunas figuras del Gobierno. “Cuidar” a Nelson Merentes, presidente del BCV, y abstenerse de mencionar que el hermano de la primera dama, Cilia Flores, era el nuevo tesorero nacional, fueron algunas de las sugerencias.

Las nuevas órdenes, no obstante, han sido principalmente dirigidas a *Últimas Noticias*, uno de los periódicos de mayor circulación en el país, con un promedio de 210 mil ejemplares diarios, y reconocido por su alta incidencia en los sectores populares. Hilda Carmona, ex jefa de Información, explica, por ejemplo, las presiones sobre la portada desde la presidencia del medio. En los titulares no podía llamarse *Maduro* a secas, sino presidente Maduro, lo que implica un problema de espacio en un periódico tabloide. Había que protegerlo: “Una vez quisimos titular diciendo ‘Maduro pide una ayudaíta para gobernar’, con el lenguaje coloquial que solemos usar en *Últimas Noticias*. Pero mandaron a cambiarlo porque dijeron que eso hacía ver débil al presidente”, explica. Los antiguos propietarios, afirma, no solían intervenir en las portadas de los periódicos. Eso quedaba a cargo de los directores y jefes de información. La diagramación y jerarquización de noticias empezaron a destacar las versiones gubernamentales sobre las demás, hasta el punto que algunos reporteros optaron, a modo de autocensura, por adaptarse. “Me decían: es que esta información me la van a mandar a bajar. Y yo les respondía: pero déjala arriba, no eres tú el que debe bajarla; si después de argumentar y dar la pelea, te la mandan a bajar, ni modo”, recuerda Carmona. Lo importante, al menos para la periodista, era tratar de que todas las informaciones salieran publicadas, aunque algunas contaran, por consideraciones ajenas al ejercicio periodístico, con mayor amplitud que otras. “Pero las sacábamos”, dice.

Protestas y renunciaciones

Nathalie Alvaray, junto con Miguel Ángel Capriles, impulsó la integración de los tres periódicos en la Redacción Única. En 2012 fue inaugurada una nueva sede de la empresa en La Urbina, en el extremo oriental de Caracas, tras décadas en su antiguo sitio de la Torre de La Prensa, hoy día sede del Minci, como parte de un proceso de transformación e innovación. El proyecto de la Cadena Capriles, además, incluía nueve unidades distintas de negocio. “Miguel Ángel quería que los periodistas también nos formáramos como gerentes y yo, con mucho gusto, tuve que aprender del negocio”, relata Alvaray. Al frente de la Vicepresidencia de Medios, también promovió la consolidación de la Unidad Centralizada de Investigación (UCI) al servicio de los distintos diarios. La defensa de un video de la UCI, de hecho, fue el motivo de una de sus últimas peleas en la compañía: el equipo de investigación logró una reconstrucción gráfica de los hechos violentos ocurridos el 12 de febrero de 2014 después de una marcha estudiantil en contra del Gobierno nacional. El reportaje develó que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) dispararon a los manifestantes y fueron responsables de la muerte del joven Bassil Dacosta, de 23 años. “Me estuvieron presionando para que bajara el video de la web, pero yo me negué”, afirma. Estas órdenes cesaron cuando el presidente Maduro reconoció en televisión nacional el comportamiento irregular de los efectivos del Sebin. El mandatario cambió, de esta manera, su primera versión, en la que había atribuido las muertes de ese día a actos de violencia de los propios manifestantes.

Alvaray puso fin a su trayectoria en la empresa un día después de que De Lima desestimara, durante la asamblea con los periodistas, la gerencia anterior en la que ella había sido una figura clave. “El periodismo primero”, dijo al despedirse de sus colegas. La frase se convirtió en bandera de las denuncias de censura y fue impresa y puesta en la mayoría de los asientos de la sala de redacción. Fue una forma de protesta frente a los cambios. Otra consistió en publicar, por varias semanas, artículos sin firmas.

“Un buen tema para investigar es quién financia las guarimbas”, propuso De Lima frente a todos y Díaz Rangel asignó la pauta a la UCI, encabezada por Tamoia Calzadilla, quien, días después, le advirtió sobre la dificultad de probar las denuncias que hacía el Gobierno nacional al respecto. El reportaje consistió, entonces, en una crónica sobre las dos caras –manifestantes y guardias nacio-

nales— de las guarimbas —nombre popular asignado a las barricadas y bloqueos de vías por parte de manifestantes opositores. El director exigió una serie de condiciones: “Que torciera la investigación para decir que eran grupos financiados por grupos extranjeros. Que las condenara, pero nunca entendí bien en qué términos quería que eso pasara. Y que no les llamara manifestantes sino que usara calificativos peyorativos contra ellos”, enumera Calzadilla. Ante la negativa de la periodista, Díaz Rangel declinó la publicación y el trabajo censurado se filtró y fue ampliamente difundido por Internet. La jefa de la UCI renunció el lunes siguiente, así como también lo harían paulatinamente los demás miembros del equipo según transcurrieron los meses. Las despedidas pasaron a ser cada vez más comunes en la Redacción Única.

Héctor Dávila (actual presidente editor del Grupo Últimas Noticias) no contestó a las peticiones de entrevista para esta nota. Tampoco Díaz Rangel, el único director de periódico que se mantiene desde la gerencia anterior, ahora involucrado en denuncias de censura. Las órdenes editoriales, con el transcurrir de los meses, son cada vez más directas: dos escoltas de Dávila esperaron detrás del asiento del coordinador web, Andrés Tovar, mientras este modificaba una nota digital a petición del presidente, relata Rafael Mata, reportero web. Funcionarios de seguridad también protagonizaron atropellos contra el periodista de Política, Odell López, a quien intentaron desalojar de la sala de redacción, luego de que la gerencia de la empresa pidiera su renuncia, por considerarlo *incómodo*, y este se negara.

“Me molesta que nos llame tontos útiles que enriquecíamos a una familia. Mi pregunta es: ¿ahora a quiénes vamos a enriquecer?”, preguntó molesto a De Lima un reportero en su asamblea de presentación. No aclaró su interrogante. Tampoco lo ha hecho Dávila. Una cláusula de confidencialidad avala sus silencios y deja en desconcierto a los trabajadores del *diario del pueblo*.

Una aplanadora pasó sobre *El Universal*

Tras 105 años de historia, en julio de 2014, uno de los decanos de la prensa nacional pasó de las manos de su familia fundadora a las de unos compradores que se ocultan tras varias empresas de fachada. Desde entonces, el diario El Universal se viene empeñando en desarrollar una cobertura sin aristas, complaciente con el poder y distraída con



(...) la última caricatura de Rayma Suprani en el diario relacionó la firma del ex presidente Hugo Chávez con la crisis de salud que padece el país desde su gestión. El vicepresidente de Información del diario, Elides Rojas, fue quien informó a la caricaturista de su despido. El motivo: por ser incómoda para la nueva directiva encabezada por Jesús Abreu Anselmi.

la disidencia, que sin rubor sus nuevas autoridades llaman “periodismo plano”.

La opinión fue la primera víctima del cambio. Más de treinta columnistas fueron despedidos; entre ellos, Néstor Luis Álvarez, quien recibió en agosto un correo electrónico donde le informaron de una suspensión *temporal* de sus servicios. Enviaba sus artículos al diario desde hacía cuatro años y sus colaboraciones se regularizaron a partir de enero de 2014: Miguel Maita, encargado de la sección de Opinión del diario *El Universal*, le cedió un espacio fijo todos los jueves en sus páginas. El único requisito, cuenta Álvarez, era enviar sus escritos cada martes antes de la una de la tarde. Ninguna otra condición, hasta que las reglas del juego cambiaron con los nuevos dueños. La firma española Epalisticia adquirió, según la versión oficial, el diario *El Universal* en julio de ese mismo año y, al mes siguiente, Álvarez fue excluido —junto a otros columnistas como Luis Izquier, Unai Amenábar, Eddie Ramírez, Orlando Ochoa, Axel Capriles, Miguel Ángel Santos, Adolfo Salgueiro, entre otros— del periódico.

Los primeros despidos apelaban a la decisión de un consejo consultivo del diario. Luego se dijo que la medida se enmarcaba en un proceso de *reestructuración*.

Muchos de esos colaboradores, no obstante, denunciaron su salida del periódico como una forma de censura y difundieron el contenido de sus últimos artículos a través de sus cuentas personales de Twitter. El 5 de agosto *El Universal* publicó,

a modo de respuesta, un editorial que hacía referencia a un código de ética “que proscribía las ofensas personales, el descrédito, las falsas informaciones, las mentiras, el irrespeto y los juicios morales”. El texto titulado “A nuestros lectores”, indicaba que los responsables de la nueva etapa de *El Universal* habían advertido la violación de esos preceptos por parte de algunos articulistas. Álvarez niega haber sido informado alguna vez sobre la existencia de este código y desestima la nota: “Pareciera que buscó la descalificación y sembrar sospecha sobre el talante crítico de los columnistas”.

Al mes siguiente, otra expresión interpretativa de la realidad venezolana fue excluida de *El Universal*: la última caricatura de Rayma Suprani en el diario relacionó la firma del ex presidente Hugo Chávez con la crisis de salud que padece el país desde su gestión. El vicepresidente de Información del diario, Elides Rojas, fue quien informó a la caricaturista de su despido. El motivo: por ser incómoda para la nueva directiva encabezada por Jesús Abreu Anselmi. “Me enorgullece que el tema de la salud haya sido el bastión con el que salgo de *El Universal*”, dice Rayma—no solo nombre de pila, sino su firma artística— sin lamentos.

No era la primera vez que sus creaciones incomodaban al presidente del diario. Antes, una caricatura sobre la reunión del presidente Nicolás Maduro con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, fue censurada. “Todavía no sé muy bien por qué, pero no gustó. Me dijeron que había sido porque el presidente Santos aparecía con cara de cerdo”, cuenta la periodista. Abreu, sin embargo, se reunió con ella tras el incidente, dijo que lo ocurrido había sido un malentendido y le aseguró que podría seguir trabajando con libertad. En ese encuentro, Rayma le sugirió al presidente la difusión de algún manual de estilo para aclarar las nuevas directrices del diario. La respuesta de Abreu, afirma la caricaturista, fue imprecisa: contestó que no había directrices y que las cosas se iban dando sobre la marcha.

Los dueños juegan a las escondidas

La primera nota que sacó el periódico anunciando su nueva etapa se publicó el 5 de julio de 2014. A 105 años de su fundación, sus propietarios cambiaron: la empresa española Epalisticia se incorporó a la estructura accionaria y desplazó a la familia Mata, sucesora del fundador del diario, del negocio.

El nombre completo del comprador es Epalisticia Private Equity y se trata de una firma de capital de riesgo creada en Madrid

el 24 de julio de 2013 con un capital que roza la cantidad mínima necesaria para inscribir una compañía: 3 mil 500 euros (500 euros más del monto exigido). Su objeto social consiste en la “compra, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas de cualquier naturaleza (...) La inversión en y administración de medios de comunicación, en especial, en mercados emergentes, con el fin de desarrollar nuevos modelos de digitalización de noticias nacionales e internacionales”, expone una base de datos pública con información del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de España.

El presidente de Epalisticia es Eduardo López de la Osa Escribano, quien ha tenido participación en otras tres empresas españolas –Lovalcama SL, Centro de Investigaciones Ginecológicas SL y Bodegas Valsardo De Peñalfiel–, según datos del Borme. Su perfil de la red social LinkedIn expone su amplia trayectoria empresarial fuera del país ibérico: estuvo asociado a las compañías Grupo CTO, Santander Private Banking Spa, Daturi e Motta Banqueting Srl, y actualmente labora en Neurored, con alcance internacional y dedicado al desarrollo de aplicaciones tecnológicas de computación.

Otros miembros directivos del consejo de administración de Epalisticia también son empresarios con varios negocios en España: José Luis Basanta ha figurado en cinco empresas más en el Borme, José Antonio López de la Osa Escribano en siete y María Teresa Atalaya Sevillano en veinte. La compañía Gallaeia Invergest SL, de asesoramiento económico y jurídico de empresas, también aparece como miembro del consejo de administración de la firma española.

Al frente de la directiva, sin embargo, se encuentra una compañía panameña con dueños venezolanos: Tecnobreaks Inc. adquirió la totalidad de las acciones de Epalisticia en mayo de 2014. Fue creada el 6 de julio de 2011 por Carlos Odín Velazco Cuello y su padre Carlos Velazco Mora, ambos oriundos de Cumaná, estado Sucre. El primero denunció ante varios medios de comunicación el uso fraudulento de su empresa para la compra del periódico. Afirmó en sus declaraciones haberse enterado a través de Twitter de la relación entre su empresa y la compra de *El Universal*, y aseguró que demandaría a su abogado José Alejandro Quiodettis, quien habría usado el nombre de su compañía para una operación de forma ilícita, sin su autorización. “Quisiera yo tener aunque sea 20.000 \$ y lo menos yo haría es invertirlo en mi país

(sic)”, dijo en un tuit. Se le pidió, a través de la red social y por email, una entrevista para este trabajo, pero no respondió.

Para este reportaje también se acudió en tres oportunidades a las oficinas de Epalisticia en España en solicitud de una entrevista formal, pero hasta la fecha de esta publicación no hubo respuesta. Y en Venezuela, Abreu, nombrado presidente de *El Universal* desde el momento en que se anunció oficialmente la venta, tampoco contestó. Su asistente, María Mercedes Estrada, afirmó, tras dos meses de espera, que tenía una *agenda apretada*.

El 13 de julio el periódico publicó una entrevista donde Abreu explicó su llegada a *El Universal*: los empresarios españoles lo habrían contactado por sus habilidades gerenciales para que asumiera la conducción de su nueva adquisición. Epalisticia, según declaraciones de Abreu y Basanta, fue usada específicamente para la ejecución de esta compra a modo de intermediaria.

Abreu, a diferencia de los españoles, no es un rostro desconocido en Venezuela. Es el hermano del *maestro* José Antonio Abreu, fundador del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, de gran reconocimiento nacional e internacional. El nuevo presidente de *El Universal* es ingeniero civil, asesor de empresas privadas y públicas, preside la compañía panameña Joyeuse Holdings Inc. y representa la empresa venezolana Tucan Petroleum Services de Venezuela que es contratista del Estado. Su mayor renombre, sin embargo, obedece a la crisis financiera de 1994 cuando el Gobierno nacional intervino el Banco Latino, lo que trajo como consecuencia la clausura temporal de 60 % del sistema bancario. Abreu fue considerado prófugo de la justicia por este caso de acuerdo con un informe de la División de Trámites Legales del Ministerio de Justicia publicado en 1998 por el periódico que ahora está bajo su dirección.

“No sólo seremos críticos del Gobierno, sino de todo aquello que sea necesario criticar (...) Aquí no habrá ni control, ni cortapisas. La libertad de expresión es un valor esencial”, declaró. Lo mismo dijo a los periodistas del diario cuando se presentó como el nuevo presidente y dijo desconocer alguna vinculación del Gobierno con la venta del periódico. Aquella reunión, cuenta el periodista Fernando Peñalver, fue breve –de unos 20 minutos– sin muchas preguntas. Mantener la plantilla y la forma de trabajo fueron algunas de las promesas. No hubo, sin embargo, correspondencia entre la propuesta de la nueva gerencia y los cambios posteriores.

Listas y “Periodismo plano”

Abreu se reunió con cada sección del periódico por separado. “Dijo que quería un periódico más equilibrado (...) Que no habría cambios en la línea editorial y que quería un periódico de propuesta porque el país ya estaba cansado de diagnósticos”, cuenta Víctor Salmerón, quien laboraba en la sección de Economía. Ese mismo día, en la noche, sin embargo, se presentó uno de los primeros casos de censura: Abreu ordenó sacar de la edición del día siguiente una nota sobre la posición de sindicalistas de Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (Sidor) sobre la firma del contrato colectivo.

Días después, otra nota sobre el mismo tema, que recogía distintas posiciones de los sindicalistas de la empresa estatal, fue sustituida por un artículo de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), adscrita al Ministerio de Comunicación e Información. Los periodistas, ante ello, redactaron un comunicado, publicado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), a modo de rechazo. *La mesa* –conformada por los jefes de redacción Elides Rojas, Miguel San Martín y Taisa Medina– informó luego que el presidente había reconocido lo ocurrido como un error.

Las sugerencias y presiones para hacer un periodismo carente de análisis e investigación por parte del periodista, no obstante, fueron aumentando progresivamente. “Ellos piden periodismo plano. Que solo haya declaraciones de voceros sin el aporte del reportero”, afirma Salmerón, quien renunció tras 16 años de experiencia en el diario.

Algunos personajes del Gobierno, por otra parte, están exentos de la lupa periodística en *El Universal*: a propósito de la destitución del ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en octubre, la reportera Thábita Molina propuso desarrollar un balance sobre su gestión, pero la propuesta fue rechazada debido a que el funcionario –de acuerdo con lo que le informaron sus jefes– integra una lista de *intocables* en el diario. Diosdado Cabello –presidente de la Asamblea Nacional–, José David Cabello –superintendente del Seniat– y Jorge Rodríguez –alcalde del municipio Libertador de Caracas– también formarían parte de la lista según palabras del editor Elides Rojas, afirma Molina. Este también habría informado, asimismo, que los dirigentes de la oposición venezolana Henrique Capriles Radonski y María Corina Machado no tendrían cabida en el periódico, “hicieran lo que hicieran”, por órdenes de la presidencia.

La posibilidad de que funcionarios, por otra parte, reclamen a los periodistas sobre la cobertura de sus temas está abierta en la sala de redacción de *El Universal*: un miembro del Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaes) de la Guardia Nacional Bolivariana buscó a Molina en la sede del diario para confrontarla sobre un reportaje de su autoría sobre secuestros en Caracas. A nadie —ni a jefes ni a editores—, dice la periodista, le extrañó la visita. El poder del Gobierno dentro del periódico está claro para todos.

La purga apenas fue televisada

Globovisión, el canal 24 horas de noticias de señal UHF, fue durante 15 años la bestia negra del régimen revolucionario. Pero quedó domesticado a partir de su compra en mayo de 2013. El consiguiente, y muy notorio, cambio de su línea editorial incomodó y alejó a varias de las caras más visibles de la pantalla. La sangría continuó en silencio al interior de la televisora, como todavía sigue, hasta asegurarse de que no hubiera ni talentos ni mensajes “molestos al Gobierno”.

El expediente de Globovisión Tele C. A. está bajo reserva: el documento que da cuenta de sus propietarios, acciones y capital no está disponible al público desde la venta del canal en mayo de 2013. “Está en custodia y desconocemos su ubicación”, es la respuesta que ofrecen en el Registro Mercantil Primero de Caracas cuando alguien pide revisarlo. Los datos de las compañías inscritas en Venezuela —archivados en los distintos servicios mercantiles del país— son de libre consulta ciudadana, con un único requisito: mostrar la cédula de identidad. Pero eso no funciona con el caso de *Globovisión*: la encargada de los documentos en custodia (aquellos bajo averiguación legal) bombardea con preguntas al solicitante: quién es, de dónde viene, para qué lo quiere, por qué ese y no otro. Y luego niega la posibilidad de consultarlo: “Ven en 20 días a ver, pero no doy garantía”. Dos semanas después, la imprecisión es igual: “Aún no se puede (...) Tendría que hacer una labor detectivesca para saber exactamente quién lo tiene”. Las negativas continuaron en visitas posteriores. La opacidad se impone: los detalles de la compra de *Globovisión* no se pueden certificar.

Carlos Zuloaga, antiguo propietario del canal tradicionalmente reconocido como opositor al Gobierno nacional, dio a conocer su decisión de vender desde principios de 2013. En marzo explicó a los trabajadores, en una asamblea, que la transacción se



El expediente de Globovisión Tele C. A. está bajo reserva: el documento que da cuenta de sus propietarios, acciones y capital no está disponible al público desde la venta del canal en mayo de 2013. “Está en custodia y desconocemos su ubicación”, es la respuesta que ofrecen en el Registro Mercantil Primero de Caracas cuando alguien pide revisarlo.

ejecutaría después de los comicios presidenciales del 14 de abril, en los que competían los candidatos Nicolás Maduro, abandonado por el partido de gobierno, y Henrique Capriles Radonski, en representación de la oposición venezolana. El evento electoral definía la continuidad o no del proceso revolucionario tras la muerte del comandante Chávez, y el dato sobre el cambio de manos en la propiedad del canal era relevante, pues *Globovisión* serviría —como, de hecho, sirvió— de única bocina difusora para la campaña de Capriles, vetado de hecho en otros medios.

Para entonces *Globovisión* tenía sobre sí la amenaza de diez procedimientos legales abiertos en su contra por el ente regulador. Solo de esos procedimientos, de prosperar, impondría al canal una multa de 2,1 millones de dólares, cifra que representaba 7,5 % de sus ingresos brutos anuales. “*Globovisión* es inviable económica y jurídicamente”, afirmó Zuloaga, recuerdan sus empleados.

La batuta de la televisora entonces quedó, dos meses después de ese anuncio, en manos de personajes reconocidos en el sector financiero: Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero, propietarios de Seguros La Vitalicia. Eso fue lo que Leopoldo Castillo —productor nacional independiente y entonces conductor del programa “Aló Ciudadano”, uno de los emblemas de la grilla del canal— informó, en presencia de los nuevos dueños, a los empleados del canal, afirman periodistas consultados.

La promesa de la nueva gerencia —la misma formulada antes por Zuloaga— fue mantener la plantilla de trabajadores y la esencia de la línea editorial, con una

diferencia considerada un punto a favor de la labor periodística: la apertura de la fuente oficial, antes negada en represalia a la postura crítica del canal. La propuesta consistía en informar con mayor equilibrio, algo propio del periodismo profesional, a lo que nadie se podía negar.

Hasta entonces, los vínculos más que aparentes entre los nuevos directivos y el Gobierno fueron, precisamente, una de las principales inquietudes de los reporteros. Manifestaron interés, por ejemplo, sobre sus relaciones con el militar retirado Alejandro Andrade, quien trabajó como guardaespaldas del ex presidente Hugo Chávez y también como tesorero nacional y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), y sobre quien pesan denuncias por irregularidades administrativas con recursos del Estado. “No solamente lo conozco, sino que es mi amigo del alma”, contestó Gorrín, recuerdan los periodistas. Un reportaje sobre fallas en el Bandes estaba en proceso esa semana en el departamento de investigación. “¿Podrá publicarse?”, preguntaron entonces los reporteros. La respuesta: “Sí, si está bien sustentado”. Así lo recuerda Mary Trini Mena, ex reportera del canal, quien recién volvía de hacer estudios por siete meses en el exterior para reintegrarse a una Unidad de Investigación que acababa de perder a su jefa: Lysber Ramos Sol había sido una de las primeras en renunciar tras el anuncio de la venta. Mena, en cambio, se quedó... hasta que la sacaron.

Si buscas, cuidado con lo que consigues

El programa se llamaba “Caso de Investigación”, salía al aire los domingos y se repetía los miércoles. El equipo estaba conformado por un jefe, un productor-editor y cinco reporteros que, generalmente, contaban con un periodo de una a dos semanas para realizar reportajes de profundidad sobre distintos temas. Con la salida de Ramos Sol, el departamento se mantuvo sin jefe durante su extinción paulatina: la gerencia del canal fue desplazando a varios de sus integrantes hacia otras funciones como la reportería de calle y la presentación de noticias. Mena, con siete años de labores, era la veterana del grupo, así lo explica. Contrató a un nuevo personal de reemplazo para garantizar la continuidad del programa. Ejerció, además, labores de coordinación mientras esperaba la designación de un nuevo jefe. Las condiciones de trabajo, sin embargo, fueron cambiando: dos reportajes, uno sobre escasez de papel sanitario

y otro sobre fallas del servicio eléctrico, no contaron con la respectiva retransmisión del miércoles. Mena y su equipo exigieron explicaciones. “Nos pusieron a hablar con distintas personas, con el jefe de producción y otros. Nos dijeron que los temas estaban desfasados y no querían repetirlos”.

Poco después, otro obstáculo se sumó a su labor reportil: los trabajos ya no serían difundidos sin una versión contrastante de voceros del Gobierno. Como quiera que los funcionarios gubernamentales boicoteaban de manera sistemática al equipo de Mena, la decisión equivalía, en los hechos, a una congelación de labores. “Quisimos hacer un trabajo sobre las muertes en las alcabalas, pero el ministro de Interior y Justicia nunca nos contestó y por eso el programa no pudo salir”, cuenta.

De cara a los comicios regionales de diciembre de 2014, la gerencia planteó a los miembros del departamento un proyecto de cobertura electoral para recorrer el país y abandonar “Caso de Investigación”. La razón de la clausura fue expuesta, recuerda Mena, de forma cruda y directa por la directora de *Globovisión*, Mayela León: “Investigar da problemas y los nuevos dueños no quieren problemas”.

El último reportaje del programa, que abordó el tema de la escasez de vehículos nuevos en el mercado, a cargo del periodista Reimy Chávez, motivó la apertura del primer procedimiento, desde la venta, de parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra el canal. La productora y el editor fueron despedidos y Mena obligada a tomar un mes de vacaciones. A su regreso, fue recibida con un cheque de despido. “No tenemos dónde ponerte”, le dijo el presidente del canal, Gustavo Perdomo. Sus ofertas de elaborar trabajos de profundidad para el noticiero fueron rechazadas. “Los dueños no quieren eso, sino noticias planas”, le explicó León.

Reimy Chávez, entretanto, fue confinado al rol de presentador de noticias. Desde esa posición también propuso al jefe de producción, Ulises Castro, una serie de trabajos especiales sobre temas de interés social, como la escasez de cemento, las colas para comprar bombonas de gas y protestas estudiantiles. Ninguna, por falta de acuerdo, llegó a concretarse. Chávez estaba en desacuerdo, entre otras cosas, con la cobertura superficial de las noticias, así que aprovechó su nuevo rol para anunciar en vivo, frente a las cámaras, su renuncia el 2 de abril de 2014. “No fue una decisión, sino un impulso”, acepta.

Funcionarios de seguridad de *Globovisión* no dejaron que, siquiera, redactara una

carta formal de renuncia. Tomaron como bueno su anuncio en pantalla y lo sacaron de las instalaciones del canal al terminar ese segmento de la emisión estelar del noticiero.

También en la trastienda

Jesús Chúo Torrealba, productor nacional independiente para entonces, se enteró la mañana del 14 de agosto de 2013, por comentarios de técnicos del canal, que sus dos programas, “El radar de los barrios” y “Del dicho al hecho”, serían sacados del aire. Extrañado, se dirigió al despacho de Juan Domingo Cordero, entonces directivo de *Globovisión* —posteriormente se separaría de la empresa—, en busca de una explicación. Este le informó que se ejecutarían una serie de modificaciones y que sus dos espacios, fuertemente críticos del Gobierno, no encajaban dentro del nuevo concepto de programación. “Yo creo en la libre empresa, tú compraste este canal y tienes derecho a manejarlo como tú quieras”, recuerda haberle contestado Torrealba, actual Secretario Ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Ese mismo día, Leopoldo Castillo transmitió su último programa de “Aló Ciudadano” y, como una muestra de solidaridad ante su renuncia, los periodistas Román Lozinski, Sasha Ackerman y Jorge Luis Pérez Valery se negaron a presentar el noticiero. La gerencia, a modo de represalia, les prohibió la entrada a las instalaciones del canal.

Fueron algunos de los casos más evidentes de lo que pasaba en la emisora, pues se trataba de rostros conocidos para el público que de pronto desaparecían de pantalla, cuando no tuvieron oportunidad abierta de despedirse delante de las cámaras.

Un poco más calladamente, los productores de los espacios informativos y de opinión lidiaban con las nuevas directrices de los dueños del canal, y no siempre salían airosos.

José Olmos, ex coordinador de estudio —encargado de la transmisión de los noticieros—, por ejemplo, da cuenta del incremento de los minutos destinados a la difusión de noticias del oficialismo en detrimento de información relacionada con la oposición venezolana o con protestas de calle por fallas de servicios públicos. El líder opositor, Henrique Capriles Radonski, asegura Olmos, fue vetado para transmisiones en vivo mientras el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello —primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV)— debía aparecer cada vez más destacado en la

programación. “Yo me sentía inconforme con mis supervisores directos. Aunque siempre obtenía una negativa, yo no podía quedarme callado, tenía que seguir denunciando que no se estaba haciendo buen periodismo”. La gerencia del canal rechazó sus quejas y fue despedido. “Me dijeron que había otros periodistas que, como yo, estaban en una lista y que iban a salir de *Globovisión* si no se ‘ponían al derecho’”.

Vanessa Ugueto y Serena Rangel, productoras también, ofrecen testimonios similares. Las dos, como Olmos, fueron despedidas tras emitir reclamos en torno a los cambios. Rangel, productora del programa matutino “Primera Página”, se vio obligada a cancelar en varias ocasiones y a último momento, entrevistas con voceros de la oposición para ser reemplazados por representantes del chavismo. “El tema de cancelar a los invitados no me dejaba hacer mi trabajo (...) Cuando llamaba a las personas que los jefes me decían, me daba cuenta de que ya alguien los había contactado antes”, cuenta Rangel. No siempre accedió a las órdenes: se negó, por ejemplo, a cancelar una entrevista con el diputado opositor Ismael García, la noche anterior a la cita estipulada. La gerencia, a través de Carlos Ramírez —uno de los nuevos jefes—, reprendió a la periodista por sus quejas. “Aquí hay intereses económicos que defender y tenemos que responder a esos intereses (...) Ya te expliqué que hay que obedecer”, son algunas de las palabras de Ramírez que recuerda Rangel. Al día siguiente, fue despedida.

Ugueto afirma que las noticias de Sucesos fueron disminuidas progresivamente y que eran reemplazadas cuando surgían informaciones de otra índole. La periodista no dudaba en discutir sobre sus notas cuando, por ejemplo, le exigían reducir los minutos para temas de oposición. Ella pedía justificaciones periodísticas. También afirma que las narraciones habladas en el sitio por los periodistas que salían en cámara, eran eliminadas o editadas en los reportes que finalmente salían al aire, sin que les informaran con anterioridad. “Yo los llamaba para avisarles y denunciaba todos esos casos de censura en mi Twitter”, dice la productora. Sus publicaciones comenzaron a ser criticadas por algunos jefes, según comentarios que llegaron a oídos de Ugueto. Días después, el consultor jurídico del canal, Sergio Arango, no dio argumentos cuando le informó de su despido. “Le pedí que me dijera por qué me estaban botando y contestó: no tengo nada que decirte”.

Gabriel Bastidas, antiguo productor de redes sociales de *Globovisión*, asegura que

desde finales de 2013 comenzó la censura en la página web. “Empezaron a ordenar que quitáramos notas ya publicadas en la página, como una sobre el nombramiento de un familiar de Cilia Flores”. Bastidas manifestaba, como otros, su molestia a través de su cuenta personal de Twitter.

Algunos rumores señalaban que la gerencia estaba descontenta con sus publicaciones y, poco después, fue despedido debido a “un proceso de reestructuración”.

La directora Mayela León, en cambio, fue más directa con el reportero David De Matteis: le informó que la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez –actual Canciller de la República–, había llamado al canal para *pedir su cabeza* a raíz de un tuit crítico del presidente Nicolás Maduro que De Matteis difundió durante una rueda de prensa del mandatario venezolano. El periodista recuerda las palabras de León: “Por órdenes de los dueños del canal, no puedes seguir aquí”. Pidió una cita con el presidente Gustavo Perdomo, con quien el periodista consideraba haber hecho empatía desde su ingreso. Perdomo, sin embargo, aunque con cordialidad –dice De Matteis–, fue tajante en su respuesta: “Si eres molesto para el Gobierno, no podemos hacer nada”.

Se solicitó durante varios meses, por vía telefónica y personalmente en la sede del canal –a través de la Dirección de Relaciones Institucionales–, una entrevista con León y Perdomo, pero hasta la fecha de esta publicación no se obtuvo respuesta alguna.

El cuarto poder se rinde ante el de Pdvsa

De la petrolera estatal se sabe que ha servido tanto de caja chica para la revolución bolivariana como de todo lo demás: productor y distribuidor de alimentos, transportista, patrocinante deportivo. Al largo etcétera que sigue, se suma el rol de editor de medios en cuencas petrolíferas del interior del país, donde la corporación se hace del control de televisoras y periódicos mediante el programa de Empresas de Producción Social o capitalizando sus acreencias

No se sabe aún cuántos millones de bolívares invirtió Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (Pdvsa), en el patrocinio de medios regionales. Tampoco, con exactitud, cuál es el motivo de ello, más allá del propósito –propio de un programa tradicional de publicidad corporativa– de garantizar una buena presencia en medios de las marcas y la agenda del holding petrolero estatal.

Lo cierto es que a través del Programa de Empresas de Producción Social (EPS), Pdvsa se hizo del control de canales de televisión y periódicos. Son los casos, por ejemplo, de *Catatumbo TV*, en el estado Zulia (Occidente del país, frontera norte con Colombia), de *Televisora de Oriente* (TVO), en Anzoátegui, y del diario *El Oriental*, en Monagas (los dos últimos en la región noreste de Venezuela).

En los casos de *Catatumbo TV* y *El Oriental*, en el propio registro mercantil de esas empresas se sella el convenio con la petrolera, mientras que en el de TVO, las millonarias cuentas por publicidad y por otros servicios prestados a Pdvsa se convirtieron, en la práctica, en la razón de ser de la televisora, que rubrica su compromiso con una programación dedicada a la imagen de la corporación. Sea como sea, el hecho es que la empresa viene mostrando un interés inusitado por controlar los medios en sus áreas de influencia.

Un relámpago que oscurece

El canal regional *Catatumbo TV* dejó de salir al aire, por unos meses, a principios de septiembre de 2014, justo después que el presidente Nicolás Maduro anunciara que Rafael Ramírez dejaría de ocupar sus cargos simultáneos de presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ministro de Energía y Petróleo, para pasar a la Cancillería.

Un mes antes de ese anuncio y de la salida del aire de la señal, los funcionarios de Asuntos Públicos de Pdvsa Occidente, en Maracaibo (capital del estado Zulia), dejaron de comunicarse con la directiva de *Catatumbo* para pautarles la agenda diaria. El cese anticipó a los directivos del canal regional que se aproximaban los problemas. Y en efecto, tras la remoción de Ramírez, todos los empleados volvieron a casa, dándose por desempleados, y en espera del reenganche. ¿Qué podía vincular un cambio en el gabinete ministerial en Caracas, con el cierre de un medio en Zulia?

Lo explica un periodista que trabajó en la televisora desde 2011 y que pidió mantener su nombre en reserva. Está seguro de que el dueño del canal es Rafael Ramírez –algo que el tracto legal de la empresa no permite comprobar en los registros públicos–, y que su cambio provocó el cierre inmediato de la emisora. En los años que estuvo como reportero, la fuente recibía órdenes directas desde el departamento de Asuntos Públicos de Pdvsa, mientras que su jefa nominal en el organigrama del medio, Judith Guevara, le dijo en varias ocasiones que lo importante para el canal no eran ni el Gobierno nacional ni Francisco Arias Cárdenas, el gober-

nador del estado por el oficialista Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV), sino las actividades de la estatal petrolera y los eventos de su brazo cultural, Pdvsa La Estancia, dirigido por la esposa de Ramírez, Beatrice Sansó de Ramírez. De acuerdo a ese mismo testimonio, en la pauta periodística del canal quedaban vetados los sectores de oposición. La opositora alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, estaría al aire solo cuando hubiera que criticarla, prescribía además la línea editorial.

La señal de televisión volvió a mediados de noviembre de 2014. Según un empleado de la agencia de publicidad del canal, Douglas Pirela, *Catatumbo TV* dejó de salir al aire porque se dañó un transmisor y los empleados nunca dejaron su lugar de trabajo. “El canal se mantuvo operativo y nunca cerró sus puertas, solo que no se transmitía su programación”, explicó Pirela.

Según el documento constitutivo de *Catatumbo TV* sus dueños son David Pernía Requena y Luz Amelia Fuenmayor. Aunque la empresa fue registrada el 26 de marzo de 2010, en su registro mercantil se encuentra anexada una asamblea extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2010, anterior a su constitución, en la que los dos accionistas consideraron suscribir a *Catatumbo TV* al Programa de Empresas de Producción Social (EPS), promovido por el Ejecutivo nacional e implementado por Petróleos de Venezuela.

“Entre otras cosas, el programa está compuesto por un conjunto de compromisos vinculados a la participación activa del capital privado en las contrataciones que realiza PDVSA y sus filiales, encaminadas al desarrollo económico y social del país, los cuales están constituidos por: la participación en el fondo social de PDVSA, desarrollar y acompañar a empresas pequeñas, lo cual incluye apoyar con desarrollo de sistemas y tecnologías y establecer programas permanentes que permitan la inserción de estas empresas en el sistema productivo...”. Básicamente, la estación se comprometía a adherirse a la agenda temática de Pdvsa. Estos compromisos los adquiere *Catatumbo* al suscribir un contrato con Pdvsa. En 2013, como último cambio plasmado en el Registro Mercantil, se incluyó a Judith Guevara como miembro de la directiva.

Esquema repetido

Pero el canal, que solo se transmitía por señal abierta, está suspendido del Registro Nacional de Contratistas (RNC) desde agosto de 2014 por no actualizar sus datos. Allí se especifica que Pernía y Fuenmayor

son los presidentes, mientras que Guevara figura como vicepresidente.

La relación de servicios solo muestra a Petróleos de Venezuela como cliente del canal, con contratos desde 2012. Aunque se trata de un canal que percibe ganancias a través de la publicidad, Petróleos de Venezuela le pagaba por la prestación de otros servicios: alquiler de equipos de cámara, transmisión de desarrollo habitacional Maisanta, transmisión de la graduación de la Misión Ribas, transmisión de apoyo informativo a *Venezolana de Televisión*, entre otros ejemplos.

Miguel David Pernía Requena y Judith Guevara son pareja. Pernía fue también vicepresidente de la *Televisora de Oriente* (TVO), canal regional de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

Además, Pernía y Guevara tienen una empresa de publicidad en Maracaibo llamada Europea de Innovaciones, con un capital de dos millones 900 mil bolívares (unos 17 mil dólares, a la máxima tasa oficial de cambio vigente en la actualidad, Simadi). Sus clientes son la *Televisora de Oriente* (TVO), *Catatumbo Televisión* y Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. A la fecha Pernía no ha contestado las peticiones de entrevista a este reportaje.

La sede de *Catatumbo* se ubica en la calle 70 con avenida 27 del sector Santa María, en Maracaibo. Allí funcionó, hasta principios de 2009, el canal *City Televisión*, una televisora regional que, a juicio de Nikary González, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, a pesar de tener vínculos directos con sectores del Gobierno nacional, mostraba una programación medianamente balanceada y no muy identificada con el partido oficialista. Su director y fundador fue Oscar Silva Araque, un periodista de reconocida trayectoria en Maracaibo, que en 2014 pasaría a la alta plana ejecutiva del canal *Globovisión* en Caracas, tras su compra por nuevos inversionistas.

City se declaró en quiebra justo después de las elecciones regionales de 2008, en las que Manuel Rosales –ex gobernador del estado Zulia, y ex candidato presidencial de oposición en 2006 frente a Hugo Chávez– resultó electo alcalde de Maracaibo. En esos comicios Rosales, derrotó al candidato oficialista y alcalde en ejercicio, Giancarlo Di Martino.

Al menos tres periodistas, que no quisieron identificarse porque trabajan en medios oficialistas, aseguran que la derrota de Di Martino fue fundamental en el cierre de *City Televisión*. Oscar Silva, su presidente, también tenía una empresa de publicidad y asesoría comunicacional

llamada Printers, con sede en Maracaibo. Sus clientes, según el Registro Nacional de Contratistas, fueron el Instituto Municipal de Vivienda de la capital del estado Zulia, La Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven), el Metro de Maracaibo, la alcaldía de Maracaibo, el servicio municipal de gas, la petroquímica Pequiven, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (Ince) y Pdvsa, todos anunciantes del Estado. Estos contratos vencieron antes de 2008, cuando Di Martino dejó la alcaldía.

Silva vendió el canal a Pernía, junto a una estación de radio, *City Radio 99.1*, que hoy es *Catatumbo 99.1*, todavía en funcionamiento. Silva, además de *Globovisión*, encontró sitio como asesor externo del diario *El Universal* luego de la controvertida venta del rotativo en 2014.

El esquema de EPS se repite en la documentación del diario *El Oriental* de Maturín, capital del estado Monagas, muy lejos de Maracaibo, a unos mil kilómetros al este.

Aunque circula desde hace 32 años, *El Oriental* dio señales de un cambio estructural a partir de febrero de 2014. Entonces cambió de dueño según el Acta Constitutiva que reposa en el Registro Mercantil de Maturín. Sus nuevos dueños son Virginio y Gaetano Constatino Silvestri, dos hermanos con empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas, que prestan servicio de mantenimiento y construcción de obras civiles, la mayoría relacionadas con las gestiones de alcaldes o gobernadores. Las empresas tienen obras en los estados Anzoátegui y Monagas. Su capital es de un millón de bolívares (o 5 mil 882 dólares, a la mayor tasa oficial de cambio).

Gaetano Constatino aseguró que hizo la inversión, pues siempre le *llamó la atención* el trabajo de los medios de comunicación. “Se dio la oportunidad. No he tenido jamás presión política”. El antiguo propietario era Tirso Ramos Linares, a quien siempre se le vinculó con sectores del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD).

Mercedes Marín, directora del medio, asegura que no hubo cambios en la línea editorial: “Este medio se maneja con amplitud, más que todo fue un cambio de procesos”.

En lo visible, el medio cambió de imagen y de diseño. Sobre los periodistas que se fueron tras el cambio de propietarios, Marín señaló que ellos mismos se excluyeron “al no poder adaptarse a los cambios”. Constatino afirmó que al asumir el impreso solo contaban con cuatro bobinas de papel que eran prestadas, una situación que, en cualquier caso, ya superaron.

AUTORES

Investigación:

Emily Avendaño, César Batiz, Mariengracia Chirinos, Juan José Faría, Cristina González, Jhon González-Lindarte, Leopoldo González-Barajas, David Matos, Gabriela Moreno, Katherine Pennacchio, Clavel Rangel, Ana Rodríguez, Yoleida Salazar

Asistente de coordinación:

Katherine Pennacchio

Coordinación de investigación:

Emilia Díaz-Struck

Edición:

Ewald Scharfenberg, Alfredo Meza, Maruja Dagnino

Edición de videos:

Manuel González Pardo

Programación, diseño e infografía:

Roselia Ruiz, Claudia Hernández, Christian Rodríguez

Coordinación de diseño:

Carmen Riera

Colaboradores:

Lorena Arraiz, José Alejandro Brizuela, Wolman Linares, Briceida Morales, Daniel Pabón, Alba Perdomo, Eva Riera, María Virginia Velázquez, Carmen Julia Viloria

Directora Ejecutiva,

Ipps Venezuela: Marianela Balbi

En su registro mercantil queda claro que *El Oriental* forma parte del Programa de Empresas de Producción Social (EPS) que promueve el Gobierno nacional y que administra Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (Pdvsa). Para poder participar en el programa, *El Oriental* se compromete a contribuir en el desarrollo de ese sistema, presentar obras “que mejoren la situación de las comunidades cercanas” y otros puntos que se concentran en un contrato con Pdvsa.